

LAS VISPERAS DE TRES CONGRESOS

CUANDO se gestó la composición del actual equipo gubernamental, alguien con bastante olfato político, pero desafortunadamente con poca o ninguna solidez teórica, profetizó que sus componentes no llegarían a comer el turrón en sus poltronas ministeriales. A unos días de las fiestas navideñas, la profecía acaba de cumplirse, aunque cronológicamente este Gobierno ponga los pies en el umbral de la próxima década. La crisis política es ya un hecho público y abierto desde el pasado día 13, en que obreros y estudiantes acababan por dar la puntilla a algo que agonizaba lentamente.

Quizá, antes de entrar en el contenido de esta crisis, haya que señalar la gravedad política de lo sucedido en Madrid, por cuanto la generalidad de los medios de comunicación, por imperativos de la lucha de clases, han rivalizado en ignorar su importancia política, para centrarse deliberadamente en aspectos anecdóticos, aunque trágicos. Por encima de la visión conspirativa de la Historia, que cree posible que cientos de miles de trabajadores se movilicen para obtener determinada fotografía o del histerismo anticomunista de algunos notorios franquistas de UCD, la realidad es que más de trescientos mil trabajadores se manifestaban en Madrid contra el Estatuto de los Trabajadores en el mismo momento en que la mayoría aritmética del Parlamento guillotina enmienda tras enmienda de las distintas minorías parlamentarias que podían aligerarlo de su contenido involutivo. Por mucho que la mayor parte de los medios informativos, sobre todo los más importantes del país, intenten ocultarlo, la realidad es que el día 13 de diciembre acaba de finalizar un Gobierno.

A partir de esta fecha se abre el abanico de la simple remodelación ministerial, del complejo Gobierno de coalición de centro derecha o de centro izquierda o de la problemática convocatoria anticipada de elecciones generales si la derecha no logra decidirse por la alianza con la minoría de derecha o con la mayoría política de la izquierda. Si las grandes huelgas de enero de 1976 y los sucesos de Vitoria dos meses después enterraban al Gobierno Arias-Fraga en el verano del mismo año, la actual lucha conjunta de trabajadores y estudiantes, junto con la de los pueblos que reivindican su autonomía, sentencia el entierro del actual Gobierno de Adolfo Suárez. Si en es-

ta sepultura entrará o no la persona del presidente del Gobierno dependerá de la medida en que sepa hacer frente a la crisis y encontrar la salida que mejor convenga a la derecha.

La horma de los Estatutos

No es nada casual que haya sido la horma de los Estatutos donde se encuentre aprisionado el zapato gubernamental. Porque

en combatividad a los nacionalistas vasco-catalanes.

Igual ocurre en la Universidad, donde el pasotismo y la indiferencia parecía hacer posible traspasar un proyecto de Ley de autonomía universitaria de contenido antidemocrático y de orientación elitista. El movimiento universitario, igualmente, tiene una tradición democrática que transforma a los pasotas de noche en activistas de la democracia de día. El desprecio de los derechos de los afectados, y la

ta de la disciplina de los aparatos de seguridad.

Una interrogante

"Impasse" reflexivo en el que, sin duda, van a influir relativamente los desenlaces de las tres reuniones políticas que se han celebrado este fin de semana: Alianza Popular, Unión General de Trabajadores y conferencia de la organización de los comunistas madrileños. Congresos que, al celebrarse inmediatamente después de los sucesos del viernes, adquieren una especial caja de resonancia.

Sobre el papel, la papeleta más fácil la tiene Alianza Popular, dado que la situación se presta al histerismo anticomunista y a la interpretación unilateral del concepto de autoridad; la más difícil corresponde a la UGT, por haber elegido de un modo posibilista bailar con la más fea del barrio —el Estatuto de los Trabajadores— en visperas de unas próximas elecciones sindicales (si no son aplazadas porque existen presiones en dicho sentido), y la de más responsabilidad al conjunto de los comunistas madrileños, que tienen que optar por mantener, disminuir o aumentar el número de sus dirigentes partidarios de la movilización de clase o de quienes defienden la desmovilización interclasista.

Aunque, con seguridad, la lección que extraiga la derecha de todos estos acontecimientos sea la imposibilidad de aplicar en España la política socialdemócrata que preconiza el ala izquierda del partido gubernamental. No sólo no hay condiciones socioeconómicas, no se puede hacer concesiones a los trabajadores y además hay que recortar las anteriores conquistas sociales y políticas de la clase obrera, sino que tampoco existen las políticas, puesto que quienes tendrían por la izquierda que cumplir la función de control popular se ven desbordados por la lucha de masas. En el poco tiempo que llevan aplicándose los prolegómenos de esta política se han movilizado ya millones de trabajadores en su contra. La interrogante en los círculos de poder político-económico está en el aire: ¿de qué nos vale pactar con alguien que carece de fuerza social y no puede cumplir sus compromisos? No tardaremos en conocer la respuesta. Esa será el nuevo Gobierno. ■

El final de un gobierno

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

es en ellos donde se comprueba si la democracia es una mera fachada o una realidad concreta. Configurar un verdadero Estado autonómico, con el poder político descentralizado, o un cuadro de relaciones laborales, con unas reales atribuciones y derechos de los Comités de Empresa y secciones sindicales, es una verdadera necesidad para la consolidación de la democracia. Y en ambos Estatutos se ha ido contra la opinión de la izquierda, la actitud posibilista de una parte de la izquierda los admite tan sólo como mal menor, y de las fuerzas democráticas de las nacionalidades y pueblos de España.

Error estratégico que ha ido acompañado, además, de una enorme equivocación táctica. Partiendo de la premisa del desencanto y de la desmovilización, este Gobierno creyó posible hacer pasar estas Leyes contra la opinión de la mayoría de los afectados. Así la descarada burla del Estatuto del Trabajador, en el que los herederos naturales del franquismo acusan de franquistas a los representantes de la clase obrera por oponerse a que se recorten las conquistas conseguidas por el movimiento obrero en su larga lucha contra la dictadura en la que figuraban no pocos de los patrocinadores del Estatuto de marras, está tan llamada al fracaso como el intento de escamoteo de los Estatutos autonómicos de los vascos y catalanes. Es decir, todavía podrá burlarse los derechos autonómicos de otros pueblos sin la tradición de lucha de las dos grandes nacionalidades, pero será imposible que lo logren con el movimiento obrero que da mil y una vueltas

buria del sistema democrático que subyace en ello, es un revulsivo político de primera magnitud, como indican estas sorprendentes movilizaciones en medio de la anterior atonía y desmovilización social de estos tres últimos años.

Clara incompetencia política, producto de creer que en el fondo nada ha cambiado en la sociedad española, que se une a un evidente fracaso económico. Las meteduras de pata del señor Abril Martorell, durante la negociación del acuerdo marco, han sido tan censuradas por los empresarios como por los sindicatos. Pues no basta con ser un buen servidor de los intereses socioeconómicos de la derecha, sino que, fundamentalmente, hay que saber servirlos con inteligencia y habilidad. La finalización del año, con su dramática secuela de parados y sus índices inflacionistas, son lo suficientemente elocuentes sobre la capacidad económica gubernamental.

Y si a esta doble incapacidad se añade una seria crisis de autoridad, como indica la negociación con ETA para la liberación de Javier Rupérez o la actuación de las Fuerzas de Orden Público en Madrid que nada tiene que envidiar a otras célebres cargas como las de Pamplona o Rentería, todo hace explicable que el bloque social de la derecha se plantease sustituir a un Gobierno que no sólo no gobierna, sino que provoca una seria movilización social, una inestabilidad de las relaciones laborales, no aborda la crisis económica y carece has-